

SECTORES ACTIVOS NO BELIGERANTES EN EL SALVADOR

Introducción

Los contrincantes principales de la guerra civil salvadoreña están bien definidos y, en cuanto conjuntos, expresan con claridad la naturaleza clasista del conflicto. Por un lado están las fuerzas articuladas sobre el eje organizativo de la gran empresa privada, que disponen en gran medida del aparato de Estado a través de los partidos políticos que representan sus intereses, y particularmente de la Fuerza Armada, a la que mantienen sometida por medio de la corrupción. Por otro lado, están las fuerzas articuladas en el FMLN, que aglutina diversas organizaciones y sectores de la población, sobre todo campesinos y obreros. Ambos contrincantes no constituyen grupos monolíticos. Están conformados por alianzas entre diversos sectores, cuyas relaciones varían según la marcha de la guerra, generando así coyunturas temporales de diferente carácter.

A pesar de su papel central, los grupos contrincantes no agotan la representación de las fuerzas sociales salvadoreñas. No pocos sectores sociales, que constituyen una parte relativamente amplia de la población, evitan identificarse con uno u otro de los contendientes y, aunque sientan mayor afinidad y simpatía por alguno de ellos, ponen de manifiesto que ninguno de los dos representa adecuadamente sus intereses y sus opciones socio-políticas.

No se trata aquí de las "mayorías silenciosas", que en El Salvador han sido siempre una "inmensa mayoría silenciada"; ni se trata tampoco de un potencial "centro político" que pudiera convertirse en portador de un proyecto alternativo al que representan los contrincantes

principales. En las condiciones actuales de guerra y represión, el fenómeno es más de polarización y fragmentación que de aglutinamiento y consolidación para aquellos sectores que no son directamente combatientes.

Se trata pues, de sectores más o menos organizados, que ofrecen una variada gama de intereses sociales y de planteamientos ideológicos, y que gravitan entre las órbitas más extrínsecas de los contrincantes, en las que eventualmente uno u otro de ellos se engarza y desprende, según las coyunturas. Se trata de aquellos sectores que, desde la perspectiva de las fuerzas en el poder, podrían ser los electores potenciales que les dieran una victoria en las elecciones o, por el contrario, cuya insatisfacción generalizada pudiera ser el catalizador de una insurrección o huelga generalizada. Y desde la perspectiva del FDR-FMLN, aquellos sectores con los que pretende ampliar su alianza para el establecimiento de un gobierno de amplia participación o, si las condiciones lo permitieran, los sectores que apoyarían un levantamiento popular. Hablamos aquí de la Iglesia, tanto de su jerarquía como de sus organizaciones o comunidades de base; de los sectores sindicales, tanto de los tradicionalmente asociados con las organizaciones revolucionarias como del creciente movimiento sindical "reformista" aglutinado en la UPD; de los sectores profesionales que no encuentran representados en los actuales partidos políticos, la esencia de sus intereses, ni en la actual organización política del país los mecanismos adecuados o los espacios políticos para ofrecer su contribución; de la pequeña y mediana empresa, que se siente abandonada por las fuerzas en el poder, que sufre en

No se trata de “mayorías silenciosas”, que en El Salvador han sido siempre una “inmensa mayoría silenciada”, ni de un potencial “centro político”.

mayor grado los efectos de una economía militarizada, pero que desconfía del FMLN-FDR; y aun de aquellos grandes empresarios progresistas, cuya honestidad les obliga a rechazar los actuales niveles de injusticia y barbarie, sabedores de la importancia y necesidad de cambios profundos, pero a quienes el FMLN-FDR no ha sabido hacer un planteamiento concreto en cuanto a cuál sería el espacio político y económico con el que contarían ni las garantías que se les ofrecerían para mantenerlo.

La pluralidad de fuerzas sociales debe ser tenida en cuenta si se quiere entender el conflicto actual en El Salvador. Pues si bien es cierto que sólo los contrincantes principales constituyen fuerzas capaces de definir la guerra en una dirección, los sectores no beligerantes representan una “masa crítica” sin la cual resulta difícil, si no imposible, que cualquiera de los proyectos políticos en litigio pueda realizarse. Así parecen percibirlo las fuerzas más extremas de derecha quienes han visto en el movimiento sindical una fuente potencial de insurrección y le han perseguido sistemáticamente, y en las organizaciones eclesiales y la Iglesia en general un propiciador y facilitador de diálogo contra el cual también han dirigido sus ataques. Así lo percibe también el FMLN, quien durante los últimos meses de 1983 parece haber disminuido significativamente sus acciones de sabotaje, particularmente aquel tipo que afecta precisamente a estos sectores, a pesar de la importancia que pudieran tener desde el punto de vista estrictamente militar.

De ahí la importancia de preguntarse por esos grupos no directamente beligerantes. ¿Quiénes los constituyen? ¿Por qué no se incorporan a uno de los contendientes? ¿Por qué y para qué los quieren las fuerzas que se enfrentan? ¿Cuál es su potencial político futuro?

Antecedentes: la polarización crítica

Cuando se produce el golpe de Estado en octubre de 1979 contra el general Romero, puede afirmarse que el proyecto político popular, entendido en los términos de un régimen que cortara de raíz los abusos del capitalismo criollo y recogiera las aspiraciones de las mayorías, contaba

con un apoyo de los sectores más diversos de la población salvadoreña. (ver Plataforma, 1979). Sólo los núcleos más identificados con el capital oligárquico levantaron banderas contra los propósitos de la primera junta, instaurada tras el golpe. Por el contrario, las organizaciones populares llegaron en ese momento a su apogeo (ver Campos, 1979): no sólo podían poner en las calles de San Salvador más de 100,000 personas (el 22 de enero de 1980 las organizaciones populares, unidas en la Coordinadora Revolucionaria de Masas, desarrollaron una manifestación con cerca de 150,000 personas, y el 30 de marzo del mismo año volvieron a poner en las calles no menos de 50,000 simpatizantes), sino que contaban con el apoyo abierto o al menos la aceptación de amplios “sectores medios”, como profesionales, pequeños empresarios, empleados públicos y privados, numerosos grupos eclesiales. Si las organizaciones populares se opusieron al golpe de estado fue en buena medida porque percibían el peligro de que la nueva Junta capitalizara hacia un proyecto reformista, mediatizado por Estados Unidos, el apoyo masivo que existía para profundos cambios sociopolíticos (ver pronunciamientos del BPR y las LP-28 en ECA, 1979, 372-373, pág. 1022-1031). Puede decirse entonces que, en ese momento, el proyecto popular contaba con el apoyo o simpatía de los más diversos sectores.

Ahora bien, la simpatía y el apoyo eran hacia aspiraciones relativamente vagas en términos políticos: mayor justicia, mayor equidad, mayor participación de los sectores populares, respeto a los derechos humanos. Había bastante claridad sobre las condiciones opresivas que se querían eliminar y las necesidades fundamentales que los regímenes existentes dejaban sin satisfacer. Sin embargo, no existía una definición sobre un proyecto social, económico y político que concretara de manera inteligible para la mayoría esos anhelos. La plataforma programática, presentada en febrero de 1980 (ver CRM, 1980), aunque era un primer paso importante, no tuvo una adecuada elaboración ulterior y ha resultado insuficiente para llenar un vacío político.

De hecho, uno de los fallos más graves que todavía no ha subsanado el movimiento revolucionario salvadoreño es el no haber sabido planear con precisión un programa político que vi-



La militarización del conflicto, acompañada por el endurecimiento de las posturas ideológicas, quemó posibles instancias intermedias capaces de integrar el apoyo de sectores menos politizados y ahuyentó a quienes no entendían o incluso temían la radicalización del proyecto popular.

sualice, más allá de los objetivos genéricos, los cambios propuestos y las formas concretas de realizarlos.

A lo largo de 1980 se produjo un proceso de creciente polarización social. Ante la movilización, fundamentalmente pacífica, de las organizaciones populares, los sectores dominantes respondieron con una ola de represión brutal, tanto mayor cuanto, tras la renuncia de la primera junta de gobierno, las fuerzas conservadoras reafirmaron o recuperaron posiciones al interior de la Fuerza Armada y de todo el aparato estatal. La gigantesca manifestación popular del 22 de enero de 1980 fue ametrallada y los manifestantes fueron perseguidos por fuerzas policiales y militares, con un saldo de unas 30 personas muertas, otras varias "desaparecidas" y no menos de 200 heridas (Escobar, 1980). Otro tanto ocurrió en el entierro de Monseñor Romero, el 30 de marzo, cuando desde edificios públicos se arrojaron bombas y disparos a la multitud reunida frente a la catedral metropolitana, causando un pánico que produjo no menos de 35 muertos.

Los datos estadísticos dan una idea sobre la magnitud de la represión desde 1980. Entre enero de 1977 y octubre de 1979 la represión política

había causado en El Salvador cerca de 750 muertos, y el gobierno salvadoreño fue acusado en todos los foros internacionales como gravísimo violador de los derechos humanos, lo cual precipitó su caída. Pues bien, sólo entre enero y febrero de 1980, el Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador reportaba una cifra de 504 personas asesinadas, cifra que ascendió a 3,111 a finales de junio, para llegar al término del año al número de 8,893 asesinatos políticos causados por las fuerzas militares o paramilitares del régimen salvadoreño (ver González, 1980). Más aún, junto a la represión factual, el régimen estableció aquellos marcos jurídicos que le permitían acometer esta tarea de aniquilación con el amparo legal: el Decreto 155 estableció el Estado de Sitio en todo el país, los Decretos 264 y 265 convirtieron en terrorista la desobediencia civil, el Decreto 296 prohibió el paro y la huelga, el Decreto 544 hizo ilegal toda actividad sindical, el Decreto 43 militarizó las grandes instituciones de servicio público y, como colofón, el Decreto 507 dejó mano libre a los cuerpos de seguridad en su lucha "antisubversiva" estimulando en la práctica la tortura e incluso las "desapariciones" (ver Martín-Baró, 1981).

Ante la represión sistemática y el cierre de todo espacio para la acción política, a las organizaciones populares no les quedó más alternativa que la clandestinidad y la militarización. El secuestro y asesinato de seis de los principales líderes populares a finales de noviembre del mismo 1980 no hizo sino confirmar lo inevitable de esa opción. Pero la militarización del conflicto, acompañada por el endurecimiento de las posturas ideológicas, quemó posibles instancias intermedias capaces de integrar el apoyo de sectores menos politizados y ahuyentó a quienes no entendían o incluso temían la radicalización del proyecto popular. Ciertamente, la propaganda del régimen se encargó de suscitar el fantasma del "totalitarismo" y del "fanatismo extremista" en la población salvadoreña (ver Martín-Baró, 1980). Pero tampoco el movimiento revolucionario dio muestras que permitieran descartar o al menos desmitificar esos fantasmas.

Un caso característico sobre la pérdida de instancias eventualmente útiles para la captación de sectores moderados se dio en la formación del Frente Democrático Revolucionario (FDR). El 6 de marzo de 1980 se hacía público un pronunciamiento de "El Movimiento Independiente de Profesionales y Técnicos Salvadoreños" (MIPTES) que, como su nombre lo decía, reunía a profesionales y técnicos de los sectores medios y propiciaba el apoyo de estos sectores al proyecto democrático revolucionario (MIPTES, 1980). El MIPTES fue acogido con simpatía y el propio Monseñor Romero cifró en su aparición muchas esperanzas. El 2 de abril de 1980, y como secuela del asesinato de Monseñor Romero, el MIPTES y otros grupos constituyeron el Frente Democrático (FD), cuyo objetivo era aglutinar las fuerzas de los sectores democráticos no revolucionarios en favor del proyecto popular. Sin embargo, apenas dos semanas después, antes de que hubiera podido lograr algún proselitismo, el FD se convierte en FDR, al integrarse con las organizaciones populares representadas en la Coordinadora Revolucionaria de Masas (ver López y Orellana, 1980). Frente a la potencial imagen de independencia del MIPTES y del FD como alternativas no revolucionarias, el FDR aparecía como un instrumento del movimiento revolucionario, bajo el control directo de la CRM. La polarización excesivamente rápida de una posible instancia intermedia como el MIPTES o el FD, anuló su utilidad de cara a la captación de ayuda entre los sectores medios salvadoreños.

Incluso la militarización de las propias organizaciones populares no sólo alejó a bastantes simpatizantes, que no se sentían con ánimos para la lucha con las armas, sino que les privó de órganos para captar, integrar y movilizar nuevos apoyos. Así, cuando estalló formalmente la guerra civil, el 10 de enero de 1981, el movimiento popular-revolucionario ya no contaba con el apoyo directo y/o abierto de algunos sectores simpatizantes suyos de la población. Desde entonces, la prolongación legalizada del terrorismo oficial o paraoficial contra toda oposición contribuyó a impedir que los sectores medios e incluso algunos sectores populares pudieran mostrar simpatía y menos apoyo por el movimiento revolucionario.

Uno de los sectores más afectados por el terrorismo del régimen fueron los grupos eclesiales. Según un informe del Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador, entre el 5 de enero de 1980 y el 17 de febrero de 1981, la represión segó la vida de un obispo (Monseñor Romero), 3 sacerdotes, 3 religiosas (norteamericanas), 1 seminarista, 21 catequistas y 8 colaboradores de la Iglesia, además de otros 160 actos de persecución, como aprisionamientos, ametrallamientos y bombas (ver Socorro, 1981). Ciertamente, la conscientización promovida por la Iglesia católica desde las orientaciones del Vaticano II y Medellín condujo a muchos cristianos a buscar los medios organizativos que hicieron efectivos sus derechos fundamentales como personas e hijos de Dios. El régimen reaccionó primero con la calumnia y el hostigamiento contra los "curas tercermundistas", y más tarde con la persecución y el asesinato contra aquellas comunidades de base, a las que percibía con razón como semilleros de rebeldías contra el estado de opresión e injusticia. La polarización del conflicto, con la militarización de las organizaciones populares por un lado y la campaña de terror oficial por otro, puso a muchos cristianos en la disyuntiva de incorporarse a la lucha revolucionaria o abandonar toda forma de participación. Algunos de ellos tomaron la primera opción; pero otros muchos, juzgando la violencia poco cristiana o atemorizados por la represión, prefirieron retirarse. Así mismo, tras la muerte de Monseñor Romero, una parte apreciable del clero que había apoyado a las organizaciones populares empezó a dar muestras de posturas más conservadoras y a condenar la violencia de los rebeldes. A ello contribuyó no sólo la campaña de persecución contra

la Iglesia, la falta de la palabra y el espíritu proféticos de Monseñor Romero o la falta de base teórica para analizar el problema de la violencia a la luz del Evangelio, sino también la cercanía y afinidad personal que muchos clérigos tenían con la Democracia Cristiana, entonces en el poder.

Un acelerado deterioro

Al término de 1981 y tras un año de guerra civil formal, la situación de los sectores obreros, en particular de los sindicatos, era francamente difícil. Después del campesinado, han sido ellos los principales afectados por la represión sistemática. Los golpea en forma muy especial el deterioro de la situación económica y la descapitalización del país, pues se encuentran más inertes frente a la propaganda oficial y la falta de perspectivas y son los más acorralados por la legislación de emergencia. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que el movimiento sindical salvadoreño fuera aniquilado; pero su capacidad de hacerse sentir en el ámbito nacional sí había sido reducida a niveles manejables por el régimen. De ahí que, por ejemplo, algunos sindicatos fueran capaces de publicar en la prensa local comunicados condenatorios del proceso electoral de 1982, impuesto por los Estados Unidos.

No se puede negar que la convocatoria a elecciones y los resquicios de espacio político que el régimen se vio obligado a abrir para que tuviera lugar el proceso, así como la insistencia propagandística de que las votaciones abrirían el camino de la paz, despertaron una cierta expectativa en diversos sectores de la población cansados por la guerra y el ahogo económico, sobre todo aquellos a quienes la polarización y militarización del conflicto había cerrado las vías reales de participación. En el peor de los casos, muchas personas consideraban que nada perdían con hacer de la necesidad virtud y verificar si, en efecto, las elecciones propiciaban alguna forma de salida al conflicto. Esta expectativa explicaría en parte lo que de más espontáneo pudo haber en la participación popular en las elecciones de marzo de 1982.

La torpeza en manejar e interpretar los resultados de las elecciones, el continuo deterioro de la economía nacional en general, y de las condiciones de vida de la población en particular, y, sobre todo, la exacerbación inmediata del conflicto entre los partidos contendientes ante la formación de un gobierno y el reparto de preben-

das, se encargaron de convertir en frustración cualquier expectativa despertada por el proceso electoral.

No obstante las similitudes cuantitativas con el período de 1979-81 en los deterioros económicos experimentados durante 1982 y 1983, estos dos últimos años apuntan a cambios cualitativos en el carácter de la economía nacional, con profundas implicaciones políticas. La prolongación de la confrontación bélica no sólo ha llevado a un retroceso cualitativo en la capacidad productiva del país y en las condiciones de vida de gran parte de la población, incluyendo los sectores medios; también ha significado pasar de una economía en guerra, es decir, afectada en forma directa e indirecta por la confrontación, a una economía de guerra, en la cual la política económica del régimen y una parte sustancial de los recursos económicos y financieros nacionales se intentan poner en favor de la estrategia político-militar que busca la victoria sobre las fuerzas del FDR-FMLN.

Si bien durante 1982 y 1983 continuaron operando fuerzas adversas a la actividad económica sobre las que el gobierno no tiene ningún control, la causa principal del deterioro económico siguió siendo la guerra, no sólo en cuanto afecta directamente la producción y el comercio, sino en cuanto aumenta el riesgo y la incertidumbre. Dada su racionalidad empresarial, la empresa privada nacional y el capital extranjero parecen percibir riesgos e incertidumbres que los llevan a no repatriar su capital, no arriesgar fondos propios y, aunque tengan fondos ajenos, a no realizar inversiones que impliquen un compromiso mayor a unos cuantos meses.

Durante 1982, el Producto Interno Bruto declinó en casi 6% y, según nuestros estimados, en 8% durante 1983. Esto significa que la producción de bienes y servicios ha disminuido en 29.4% desde 1979. Los once sectores que conforman la estructura económica nacional experimentaron serias disminuciones durante 1982, y según nuestras proyecciones, nuevas y mayores contracciones durante 1983.

A manera de ejemplo, el sector agropecuario disminuyó su producción en 7.4% durante 1982 y en 8.7% en 1983. El descalabro de este sector es de particular importancia por el papel que juega en la economía salvadoreña como fuente generadora de empleos, divisas, y productos básicos. Los principales factores que parecen haberle afectado son la ampliación de la guerra y

la pérdida de control de vastos territorios por parte de la Fuerza Armada; la actitud de boicot de los terratenientes y la mala administración de la reforma agraria. La disminución en áreas sembradas y rendimientos es tal vez el mejor síntoma de falta de confianza de los agricultores en el proyecto político-militar del gobierno de unidad nacional tanto para contener a los insurgentes como de implementar una política económica que los favorezca.

La contracción de la actividad económica en general ha afectado en forma dramática las condiciones de vida de los sectores populares, aquellos que aún en condiciones normales tienen la menor capacidad de resistir las perturbaciones económicas dados sus bajos niveles de ingresos, su casi inexistente patrimonio y la relativa falta de organización. A partir de 1982 se comienza a percibir una ampliación del deterioro a sectores que en el pasado no habían sido afectados en forma significativa: empleados públicos, profesionales, auto-empleados y sectores medios en general.

En un plano macroeconómico, la principal evidencia del deterioro está relacionada con los

niveles de consumo. Los gastos de consumo del salvadoreño promedio, ajustados por inflación, disminuyeron en más del 27% entre 1979 y 1981, y en un 20% adicional de entonces a la fecha. Entre 1979 y 1983 ha habido un incremento del 97.7% en el índice general de precios. Sin embargo, el vestuario y el calzado aumentaron en un 153% durante ese período; los alimentos en un 122%; y los productos misceláneos (transporte, educación, salud, medicinas y productos sanitarios) en un 98%. Estos datos se vuelven más dramáticos si consideramos que el 63% de las familias salvadoreñas dedican entre el 62 y el 65% de todos sus gastos a la alimentación, el vestido y el calzado.

El deterioro del poder adquisitivo del colón y los niveles de consumo son el resultado de las acciones y omisiones de la política económica vigente. No obstante la continua vigencia del Decreto 544, que establece el control sobre los precios de algunos bienes de consumo y servicios esenciales, el proceso inflacionario ha seguido deteriorando los ingresos reales de amplios sectores de la población cuya única fuente de ingresos la constituyen los sueldos y salarios que el mismo



Los sectores no beligerantes representan una masa crítica sin la cual resulta difícil, sino imposible, que cualquiera de los proyectos en litigio pueda realizarse.

décreto mantiene congelados desde 1980. Los incrementos simbólicos que se han autorizado (que no sobrepasan el 10%) se restringen al sector privado y dependen de la voluntad del patrono. Según estadísticas oficiales, sólo el 7% de empresas había otorgado para mediados de 1983 el aumento autorizado a principios de año. Como resultado del Decreto 544, los salarios mínimos reales del sector público y privado han descendido en 65% entre 1979 y principios de 1983.

Además de los deterioros económicos anteriores, se dan otros de carácter social: el sistema de salud pública y el seguro social reportan 31 centros de salud paralizados y 45,000 cotizantes menos, respectivamente; faltan medicinas en las instituciones de salud pública y se ha empezado a cobrar por los servicios; las asignaciones presupuestarias dentro de los hospitales nacionales para adquirir medicinas se han reducido en 27.7%. Similar situación se da con los servicios de educación. Además de los recortes presupuestarios, más de 1,500 escuelas han cerrado, afectando aproximadamente a 110,000 estudiantes.

Las condiciones de vida también se han visto afectadas por el empleo. Según estadísticas oficiales, de un 8% de desempleo abierto en 1979 se ha pasado a un 38% a principios de 1983. Sin embargo, en 1979 el 51% de la población económicamente activa ocupada estaba subempleada, es decir, que no trabajaban un tiempo suficiente y/o que percibían salarios inferiores al mínimo. Para principios de 1983 la tasa de subempleo llegaba a casi el 80%.

El problema del deterioro económico y de las condiciones de vida no puede entenderse con referencia solamente a las disminuciones en algunas variables e indicadores que, pudiera pensarse, "natural e inevitablemente" disminuyen en un contexto de guerra. Parece haber una creciente conciencia entre los sectores afectados que entre el deterioro socio-económico y las causas que el régimen presenta como aparentemente responsables, está de por medio la política económica, es decir, los criterios para distribuir pérdidas y ganancias. Si antes de la guerra la política económica colocaba a los sectores populares y gran parte de los sectores medios en el último lugar a la hora de distribuir pérdidas y beneficios, ahora que la situación ha cambiado y que lo que se distribuyen son costos, pérdidas y sacrificios, estos mismos sectores ocupan el primer lugar en la distribución.

Algunos de los instrumentos de política económica que el régimen ha establecido para impulsar su economía de guerra parecen ser los siguientes:

- a) La absorción de ingresos privados a través de modificaciones a la ley de papel sellado y timbres fiscales, incrementando en 3% todos los impuestos indirectos sobre bienes adquiridos y servicios prestados, así como los intentos por establecer un Impuesto al Valor Agregado;
- b) Restricciones en la oferta de crédito, tanto de los destinados a la empresa privada para producción no prioritaria como de los destinados para otros propósitos;
- c) Controles directos y asignaciones específicas de divisas para lograr incrementos en la oferta agregada, que fundamentalmente se han logrado a través de la devaluación de hecho del colón en la creación de un mercado paralelo;
- d) Políticas restrictivas en cuanto a los niveles de ingreso de la población, fundamentalmente a través del Decreto 544;
- e) Reducciones en los volúmenes de inversión pública y privada en todos aquellos proyectos no necesarios para la guerra. Durante 1982 la inversión interna bruta se redujo en 12.6%, y la formación de capital fijo por parte del sector público en un impresionante 35%. La situación ha empeorado en 1983: la formación de capital fijo público y privado se podría haber reducido en 6 y 9.4%, respectivamente.
- f) Control directo de todos aquellos inventarios o fuentes de aprovisionamiento de productos útiles para el esfuerzo de guerra: por ejemplo, granos básicos, comestibles en general, medicinas, etc. Durante 1982 y 1983, el Instituto Regulador de Abastecimiento y las instancias gubernamentales encargadas de la ayuda humanitaria para refugiados han iniciado una serie de proyectos que les ponen en control de todos los alimentos y medicinas que en forma de ayuda o donación están llegando al país. Además, se han creado escaseces artificiales de granos básicos, aceite y otros productos esenciales.
- g) Ayuda extranjera en bienes o servicios que aumentan la oferta agregada militarizable o bien el endeudamiento externo. Sólo entre 1982 y 1983, El Salvador ha obtenido 2,300 millones de colones en ayuda extranjera. Según el ministro de hacienda, 25% de todos los ingresos fiscales se dedicarán en 1984 para

amortizar el capital y los intereses de la deuda pública.

Una paulatina reactivación

Lo explosivo que esta situación de economía de guerra y deterioro generalizado pueda tener, desde un punto de vista político se ha logrado desactivar en la medida en que no existen canales organizativos que traduzcan el descontento en acción reivindicativa y mediante la represión sistemática ante cualquier tipo de demandas reivindicativas que emergen y sobre las que el gobierno no tiene control. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, ya desde mediados de 1982, y más claramente en 1983, tras el patente fracaso del gobierno de unidad nacional por conseguir la paz, por paliar la gravedad de la situación económica, o por desarrollar algún tipo de política consistente, empezaron a resurgir la actividad y reivindicaciones en las organizaciones laborales por un lado, y por otro, se observaron intentos por hallar vías alternativas a las propuestas de los contendientes principales. Ninguno de estos esfuerzos alternativos ha alcanzado hasta el presente un peso suficiente como para hacerse sentir en forma significativa en la confrontación y, más bien, alguno de ellos ha sido manipulado por los contendientes. En este sentido resulta paradigmático el caso de la Unidad Popular Democrática (UPD).

La UPD es una organización laboral que surgió a principios de 1980, compuesta principalmente por grupos campesinos (sobre todo la UCS y la ACOPAI) y dos federaciones de sindicatos obreros (FESINCONTRANS y CTS). Alguna de las agrupaciones miembros, en particular la UCS, habían gozado del apoyo norteamericano a través de programas de la AID por sus relaciones con la AFL-CIO. Estos vínculos y sus planteamientos ideológicos habían hecho que la UCS fuera rechazada por los grupos revolucionarios de la CRM. Al iniciarse el programa de reforma agraria en marzo de 1980, los miembros de la UCS se convirtieron en sus principales y casi únicos beneficiarios y casi pasaron a constituir la principal base de apoyo campesino de la Democracia Cristiana gobernante. Sin embargo, tras las elecciones de 1982 la UPD percibió el pe-

ligro inminente de que las reformas iniciadas fueran anuladas y su consiguiente movilización en defensa de ellas le ubicó coyunturalmente no sólo frente a las fuerzas triunfadoras (la alianza de partidos encabezados por ARENA), sino que le acercó a los reclamos populares de otros grupos laborales.

Es cierto que el apoyo norteamericano y el PDC permitió a la UCS (y a la UPD en su conjunto) hacer planteamientos públicos reivindicativos e incluso salir a la calle con manifestaciones, imposibles para cualquier otro grupo popular bajo el vigente estado de sitio. Pero también es verdad que, en esos momentos críticos, la UPD se convirtió en una voz relativamente nueva, que demandaba con moderación la realización de los aspectos más positivos del plan reformista iniciado en 1980, y planteó el malestar de las capas populares por el continuo deterioro de las condiciones de vida y de las medidas represivas. De hecho, la UPD atrajo las iras y las fuerzas paramilitares, y varios de sus afiliados, sobre todo miembros de cooperativas campesinas, fueron secuestrados y asesinados por "escuadrones de la muerte". Con todo, una vez que el gobierno de "unidad popular" aseguró la continuación de la reforma agraria, así sea a costa de ir restándole alcances, la UPD reafirmó en la práctica su postura de apoyo condicionado al proceso. Esta "rebeldía controlada" se repitió varias veces en 1983, cada vez que algún aspecto importante de la reforma agraria fue cuestionado legal o prácticamente. De este modo, el intento de la UPD por constituir una vía alternativa de activismo popular resultó, en definitiva, manipulado por la Democracia Cristiana y Estados Unidos en su pugna con la oligarquía ARENA al interior del bloque en el poder.

Si la UPD constituye un grupo con pretensiones de alternativa en la órbita progubernamental, el Movimiento Unitario Sindical y Gremial de El Salvador (MUSYGES) constituye su equivalente en la órbita pro-insurgente. El MUSYGES surgió hacia finales de 1982 como expresión del creciente malestar en los sectores populares, que en algunos casos empezó a ser más fuerte que el terror a la represión. MUSY-

Lo explosivo de la economía de guerra y del deterioro generalizado se ha desactivado en la medida en que no existen canales organizativos que traduzcan el descontento en acción reivindicativa y mediante la represión sistemática ante cualquier tipo de demandas.



GES agrupó a los residuos de las federaciones sindicales más importantes de El Salvador, incorporadas con anterioridad al FDR y diezmadas por la sistemática campaña de aniquilación oficial y paraoficial: FSR, FENASTRAS, FUSS, FESTIAVTSCEs, FUSEPM, CGS, FESTRAS y otras. En sus planteamientos crítica al gobierno, su dependencia cada vez mayor de Estados Unidos, su falta de respeto a los derechos humanos, pero defiende la continuación y profundización de las reformas iniciadas; apoya el diálogo sin condiciones con los insurgentes como vía hacia la paz; manifiesta su solidaridad repetidas veces con los trabajadores en los conflictos laborales que van surgiendo, y reclama la conquista de un gobierno en el que los trabajadores tengan participación real —todos ellos, planteamientos muy cercanos al FDR-FMLN. Sin embargo, el movimiento obrero representado en el MUSYGES ha dado muestras de ir siempre a la zaga de los avances del FMLN, sobre todo en lo pertinente a la unidad de las fuerzas democrático-revolucionarias y a la evolución de sus propuestas.

Aunque tanto la UPD como MUSYGES tienen sobre el papel más de 30,000 afiliados, no parecen contar en los momentos actuales con una capacidad de movilización significativa. Las manifestaciones realizadas por la UPD en apoyo a la reforma agraria frente a la asamblea constitu-

yente, en las que reunió 3,000 personas y sobre todo la tenida el 27 de septiembre de 1983, con casi 20,000 simpatizantes, fueron más llamativas por el contexto en el que se producían que por su naturaleza. No se puede ignorar el apoyo que para realizarlas recibió tanto del PDC como de la embajada norteamericana. Por su parte, MUSYGES se ha pronunciado a través de algunos medios de comunicación y ha sido capaz de desarrollar algunas actividades internas significativas, pero su membresía es en buena medida más nominal que efectiva y el ámbito de su actividad sigue estando seriamente limitado. Con todo, el MUSYGES representa un verdadero intento por hacer resurgir el movimiento sindical obrero a pesar del terrorismo represivo y constituye uno de los sectores organizados potencialmente más importantes para el futuro próximo de El Salvador.

Otro sector que empezó a reactivarse a lo largo de 1982 y 1983 fue el de las comunidades de base cristianas. Desde las cenizas de la persecución, nuevos grupos empezaron a surgir, con una conciencia clara sobre la necesidad de mantener su autonomía e independencia frente a las organizaciones revolucionarias, pero con simpatía hacia sus planteamientos y proyectos políticos. Estas comunidades son particularmente activas en las zonas populares del área metropolitana, pero también en ciertas poblaciones campesinas.

La misma jerarquía eclesiástica, sobre todo el Arzobispo de San Salvador, Mons. Arturo Rivera, ha ido recuperando capacidad de denuncia e independencia frente a las posturas gubernamentales, en particular desde que el PDC dejó de dirigir el gobierno.

Tanto la embajada norteamericana como ciertos sectores más moderados de algunos partidos en el poder (Acción Democrática, el PDC, el PCN) han intentado a lo largo de 1983 formar una especie de "centro democrático", capaz de derrotar al poder de la oligarquía y sus satélites, pero también de ganarse el apoyo de amplios sectores sociales medios, enajenados por la polarización militarista del conflicto, de integrar organizaciones como la UPD e incluso de ofrecer una alternativa más aceptable internacionalmente. Pero su planteamiento erróneo frente a la guerra, su obstinado cierre a un diálogo con los insurgentes y su transigencia frente a la corrupción de la Fuerza Armada, han impedido que ese intento progrese, dando así la verdadera dimensión sobre las posibilidades que tiene la actual postura norteamericana de ofrecer una solución realista a los problemas de El Salvador.

Es difícil anticipar la evolución de los sectores no beligerantes en el futuro próximo del país. A pesar de que la mayor parte de ellos se separaron o no se incorporaron a los insurgentes, tanto por su rápida y radical polarización como por la campaña de terror represivo desarrollada desde el poder, sus posturas siguen teniendo más afinidad con las del FDR-FMLN que con las posturas de los sectores dominantes. Su reactivación está coartada por la permanencia de la política de represión hacia todos los núcleos de apoyo potencial a los insurgentes y la falta de espacio para cualquier quehacer sindical y político que no sea favorable al régimen. Pero es de prever que, a

medida que se prolongue el fracaso del proyecto norteamericano en El Salvador y el FMLN modere y clarifique sus planteamientos, estos sectores pueden constituir la base social de apoyo necesaria para dar viabilidad a un proyecto sociopolítico de carácter popular. De hecho, la propuesta insurgente de un gobierno "de amplia participación", aunque necesita todavía mucha precisión, parece más capaz de integrar un posible "centro democrático" que cualquier gobierno que pueda surgir de las elecciones del 25 de marzo de 1984, cuyo único horizonte cierto es el de la continuación de la guerra, cada vez más sometido a la ayuda e injerencia directa de Estados Unidos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Campos, Tomás R. "El papel de las organizaciones populares en la actual situación del país." *ECA*, 1979, 372-373, 923-946.
- Coordinadora Revolucionaria de Masas, "Plataforma programática para un Gobierno Democrático Revolucionario." *ECA*, 1980, 377-378, 343-345.
- Escobar, Francisco Andrés, "En la línea de la muerte (la manifestación del 22 de enero de 1980)." *ECA*, 1980, 375-376, 21-35.
- González, Gabriel A. "¿Genocidio y guerra de exterminio en El Salvador?" *ECA*, 1980, 384-385, 983-1000.
- López Vallecillos, Italo y Orellana, Víctor Antonio, "La unidad popular y el surgimiento del Frente Democrático Revolucionario." *ECA*, 1981, 377-378, 183-206.
- Martín-Baró, Ignacio, "Fantasmas sobre un Gobierno Popular en El Salvador." *ECA*, 1980, 377-378, 277-290.
- Martín-Baró, Ignacio, "La guerra civil en El Salvador." *ECA*, 1981, 387-388, 17-32.
- MIPTES, "Plataforma ideológica del Movimiento Independiente de Profesionales y Técnicos de El Salvador." *ECA*, 1980, 377-378, 357-359.
- "Plataforma común del Foro Popular." *ECA*, 1979, 371, 843-845.
- Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador, "Persecución a la Iglesia." *ECA*, 1981, 389, 231-239.